

Santiago, veinticinco de abril de dos mil veinticinco.

Vistos:

El Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, en causa RUC 2300534869-2 y RIT 412-2024, por sentencia de siete de febrero de dos mil veinticinco, condenó a **ABRAHAM NICOLÁS ASTORGA ASTORGA**, a la pena de **seis (6) años de presidio mayor en su grado mínimo** y al pago de una multa 40 de Unidades Tributarias Mensuales, como autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 3° en relación al artículo 1° de la Ley N°20.000; y a la pena de **siete (7) años de presidio mayor en su grado mínimo**, como autor del delito consumado de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, previsto y sancionado en el artículo 13, inciso primero, en relación con el artículo 3 letra e) de la Ley N°17.798, ilícitos perpetrados el 22 de diciembre de 2022, en el territorio jurisdiccional del tribunal.

Se le condena, además, a las penas accesorias legales correspondientes y se dispuso que las penas privativas de libertad impuestas debían ser cumplidas de manera efectiva.

En contra de dicha sentencia, la defensa del acusado Astorga Astorga dedujo recurso de nulidad, el que fue admitido a tramitación, celebrándose la audiencia para su conocimiento el siete de abril del año en curso, según da cuenta la respectiva acta agregada a estos autos.

Considerando:

1°) Que el recurso de nulidad deducido, se sustenta de manera principal, en la causal de invalidación contemplada en el **artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal**, por la errónea aplicación de los artículos 1°, 3°, 42 y 43 de la Ley N°20.000, artículos 1° y 2° del Código Penal y artículo 19 N°3 incisos noveno y décimo de la Constitución Política de la República de Chile, al sancionar como delito una conducta que carece de antijuricidad material ante la falta de pureza de la droga incautada y la ausencia real de puesta en peligro del bien jurídico de la salud pública.



Argumenta que del tenor de lo previsto en el artículo 3° con relación al artículo 1° de la Ley N° 20.000, se infiere que las sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas objeto material del ilícito, debe ser productora de dependencia física o síquica y, además, deben ser capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud, razón por la que el artículo 43 de la misma ley, prevé como obligatorio la confección de un protocolo de análisis químico de la sustancia suministrada, que identifique el producto, su peso o cantidad, naturaleza, contenido, composición y grado de pureza; así como un informe sobre los componentes tóxicos y psicoactivos asociados a la sustancia incautada, en el que se precise los efectos que producen y la peligrosidad que reviste para la salud pública.

Pese a esta exigencia legal, el recurrente sostiene que los informes periciales incorporados por el Ministerio Público como prueba documental y analizados en el considerando octavo de la sentencia impugnada, sólo concluyen que en la sustancia incautada existe presencia de cannabinoles, de manera que se desconoce si la sustancia periciada contiene otras sustancias, lo que resultaba relevante en consideración a que la mayor parte de las especies vegetales a granel incautadas, correspondían a tallos y hojas secas que contienen bajos porcentajes de THC, por lo que no es posible determinar si las concentraciones de la droga incautada en el caso concreto, son capaces de producir efectos tóxicos en la salud.

Solicita se invalide sólo la sentencia impugnada y se dicte, sin nueva audiencia, pero separadamente, la sentencia de reemplazo que absuelva a su representado del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, por ausencia de antijuridicidad material;

2°) Que, en subsidio, hace valer la causal de nulidad prevista en el **artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal**, por errónea aplicación de los artículos 3 y 8 de la Ley N°20.000, al haberse calificado los hechos como constitutivos del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, en la hipótesis de poseer y guardar



sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas, en circunstancias que los hechos acreditados debieron ser subsumidos en el delito de cultivo de especies vegetales del género cannabis, previsto y sancionado en el artículo 8 de la misma ley.

Asegura que, de la prueba rendida, no se logró acreditar que las especies vegetales incautadas provinieran de una plantación diversa a la encontrada en el domicilio, las que correspondían a hierba seca y a la cosecha de lo cultivado, mantenidas a granel en distintos contenedores (cajas de zapatos, frascos de vidrio, cajas de plátano). Así como tampoco hubo prueba o algún elemento indiciario que demostrara la transferencia de la sustancia a terceros.

Por lo anterior solicita se anule únicamente la sentencia y dicte, sin nueva audiencia, pero separadamente, una en su reemplazo que condene a su representado a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, como autor del delito de cultivo de especies vegetales del género cannabis, previsto y sancionado en el artículo 8 de la Ley N° 20.000;

3°) Que, como segunda causal subsidiaria, la defensa del acusado Astorga Astorga esgrime la prevista en la **letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal**, en relación con los artículos 342 letra c) y 297 del mismo Código, por haberse infringido el principio de razón suficiente, desde que la sentencia impugnada no contiene los razonamientos utilizados por la judicatura para tener por acreditadas las conductas constitutivas del ilícito de tráfico ilícito de estupefacientes.

Explica que, en el considerando noveno de la sentencia, se sostiene que el acusado tenía conocimiento de la existencia de la sustancia ilícita incautada, desde que los funcionarios policiales que participaron en la diligencia de entrada y registro del inmueble donde habitaba, señalaron que la sustancia se encontraba repartida por toda la casa. Sin embargo, esta conclusión no se ajusta a la declarado por el Capitán Javier Elías Ortiz Rodríguez quien señaló que la droga estaba distribuida en distintas dependencias, en su mayoría en envases cerrados



(cajas de zapato, frascos de vidrio, cajas de plástico) guardados en un rack o en el interior de un velador, lo que quedó ratificado con la cadena de custodia de las especies incautadas y la declaración de los funcionarios policiales Diego Ripetti Smith y Manuel Angulo Fuenzalida.

En cuanto a la propiedad de dichas especies y plantas, el recurrente sostiene que se demostró que estas pertenecían a doña Patricia Rodríguez Pino, conviviente de su defendido, la que así lo declaró en el juicio, agregando que las utilizaba para aliviar los padecimientos que le afectan, quien explicó que las prensas halladas las utilizaba en las labores que ésta desarrollaba en una editorial de libros de la que forma parte, declaración que fue corroborada por la testigo Camila Figueroa Bórquez. Por consiguiente, a juicio de la defensa, no se logró acreditar que los elementos incautados pertenecieran al acusado, como tampoco que le haya sido encomendado el cuidado de las especies vegetales vivas incautadas.

Asegura que la judicatura efectúa un ejercicio inferencial indebido, ya que de la circunstancia que el acusado tuviera su domicilio en el inmueble donde fue hallada la droga, no es posible concluir que conocía de su existencia y que estaba en posesión y guarda de la misma.

Solicita se anule el juicio oral y la sentencia impugnada, y ordene la remisión de los autos al Tribunal del Juicio Oral en lo Penal no inhabilitado que corresponda, para la realización de un nuevo juicio oral;

4º) Que, para una mejor comprensión del libelo recursivo deducido, resulta pertinente revisar los hechos establecidos por la judicatura del fondo. Así, en el fundamento décimo de la sentencia impugnada, se tuvo por acreditados los siguientes hechos:

“El día 22 de diciembre de 2022, en horas de la mañana y mediante autorización judicial, personal de la policía de Carabineros de Chile hizo ingreso al domicilio ubicado en pasaje Armando García Castillo N°952, comuna de El Bosque, domicilio ocupado y a cargo de Abraham Nicolás Astorga Astorga, lugar



donde se encontró marihuana con un peso bruto de 3208,7 gramos y peso neto recibido 3187,4 gramos distribuida en diversos contenedores, además cinco plantas del género cannabis con un peso bruto 3900 gramos, peso neto 3900 gramos, especies que se mantenían bajo la esfera de resguardo de Astorga Astorga, quien las guardaba y tenía, careciendo de todo tipo de autorización.

Además, Abraham Nicolás Astorga Astorga, tenía bajo su esfera de resguardo, sin contar con autorización alguna, una subametralladora con dos cargadores y un supresor de sonido todos elementos de fabricación artesanal”.

Estos hechos fueron calificados por la magistratura del fondo como constitutivos de los delitos consumados por los que el sentenciado Astorga Astorga resultó condenado, perpetrados en la comuna de El Bosque, el 22 de diciembre de 2022 y en los que le correspondió participación en calidad de autor;

5°) Que, como se reseñó en el motivo 1° que antecede, el recurso de nulidad impetrado por la defensa de Astorga Astorga invoca de manera principal, la causal prevista en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, denunciando que en el pronunciamiento de la sentencia, se efectuó una errónea aplicación de las normas que individualiza, al sancionar como delito una conducta que carece de antijuricidad material ante la falta de pureza de la droga incautada y la ausencia real de puesta en peligro del bien jurídico de la salud pública.

Sobre el particular, los jueces del Tribunal Oral, luego de reseñar el contenido del protocolo de análisis químico de las sustancias incautadas, en el que se concluye la presencia de cannabinoides en las muestras periciadas; los oficios remisoros al Servicio de Salud Metropolitano Sur de las mismas, con la descripción del peso y características, así como los informes de peligrosidad sobre los efectos y riesgos del consumo de la cannabis-marihuana, extendidos respecto a cada una de las cadenas de custodias de las especies incautadas, en el fundamento octavo, concluyeron:

“En resumen, con el mérito del dictamen de los expertos del Instituto de Salud Pública, de la prueba documental incorporada y lo referido por los



funcionarios de Carabineros Teniente Diego Ignacio Ripetti Smith, Capitán Javier Elías Ortiz Rodríguez, Sargento 1° Carlos Alberto Arias Valdebenito y Capitán Esteban Gabriel Muñoz Cárdenas, quienes participaron el día 22 de diciembre de 2022, en el allanamiento del domicilio ubicado en Pasaje Armando García Castillo N°952, comuna El Bosque, funcionarios que apreciaron directamente la droga incautada, además, lo informado por el Capitán Ortiz Rodríguez y el Sargento 1° Arias Valdebenito quienes refirieron que funcionarios de OS7 efectuaron prueba de orientación a la sustancias incautada dando positivo a THC agente activo de cannabis sativa, agregando el Sargento Arias que tenía un peso aproximado de 2.600 gramos, además se realizó prueba de campo a 7 plantas en proceso de crecimiento e hidratación que también dio positivo a THC agente activo de cannabis sativa, droga que luego fue remitida al Instituto de Salud Pública, donde finalmente se determinó científicamente que se trataba de cannabis sativa, esto es, sustancia o droga estupefaciente o sicotrópica, descritas en el artículo 1° del Reglamento de la Ley 20.000”;

6°) Que, del razonamiento expresado por la judicatura del fondo antes transcrito, no se advierten los errores de derechos denunciados al calificar los hechos como constitutivos del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, previsto en el artículo 3° de la Ley N°20.000, desde que la pureza de la sustancia traficada no es una exigencia de ese tipo penal.

Al efecto se debe tener presente que la propia Ley N° 20.000, en su artículo 63, ha establecido que será un reglamento el que señale las sustancias a que se refiere el artículo 1° del referido cuerpo legal, dictándose el D.S. 867 del año 2008, que reemplazó al D.S. 565 del año 1995, encontrándose la *cannabis*, en sus estados de resina, sumidades floridas o con frutos, o extractos y tinturas, contemplada en el actual artículo 1° del citado Reglamento.

De esta manera, la presencia de los principios activos de la sustancia de rigor es suficiente para calificarla como aquellas que constituyen el objeto material del delito de tráfico ilícito de drogas, cuestión que ocurrió en este caso al



detectarse en las muestras periciadas, según se explicitó en el transcrito fundamento octavo de la sentencia impugnada, la presencia de aquellos principios activos propios de dicha sustancia;

7°) Que, en cuanto a la falta de lesividad de la conducta sancionada al bien jurídico tutelado, conviene aclarar que esta Corte ha sostenido en sentencias pasadas, que el delito de tráfico o porte de pequeñas cantidades, descrito en el artículo 4° de la ley del ramo, requiere que el ente acusador pruebe en el juicio la peligrosidad para la salud colectiva de la sustancia específica requisada, mediante el informe técnico que especifique la composición y grado de pureza del producto examinado, puesto que dicho antecedente es el que demuestra la lesividad o peligro concreto que reviste la sustancia estupefaciente, tales disquisiciones, en todo caso, se justificarían para dar por establecido el ilícito de tráfico de pequeñas cantidades de estupefacientes, desde que dicho componente es trascendente a la hora de confirmar o descartar el uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo del tenedor de la droga. Es esta causal de exención de responsabilidad penal la que tornaría en imprescindible contar con el estudio de la calidad o pureza de la sustancia, y que no aparece en la tipificación del artículo 3° de la ley 20.000.

De esta manera, resultan improcedentes las alegaciones vertidas por la defensa en su recurso, toda vez que el total de las sustancias incautadas al imputado, —no discutida— a saber 3,187 kilos netos de marihuana elaborada, además de cinco plantas del género cannabis, dada su aptitud de ser dosificada y distribuida a numerosos consumidores finales, revela la inequívoca presencia del peligro concreto para la salud pública, objeto jurídico de protección amparado por la Ley 20.000 (SCS N° 23245-2019 de 30 de septiembre de 2019).

En este estado de cosas, el objeto material del delito de tráfico de estupefacientes ha sido demostrado en el caso en comento, motivo por el cual no han errado los sentenciadores al establecer que los hechos descritos satisfacen la figura típica del artículo 3 de la Ley N°20.000;



8°) Que, en cuanto al segundo reproche planteado, consistente en la errónea aplicación de los artículos 3 y 8 de la Ley N°20.000, sigue entonces revisar si en la especie concurren los presupuestos del artículo 8° de la Ley en comento, esto es, si se establecieron hechos en la sentencia que puedan ser calificados como constitutivos de siembra, cultivo o cosecha de plantas de cannabis sativa.

Sobre el particular, la judicatura del fondo en el punto uno del considerando noveno de la sentencia impugnada, señaló:

“Desprendiéndose de la prueba presentada que en atención a la cantidad de droga incautada en poder del acusado Abraham Astorga Astorga, esto es, 3208,7 gramos bruto de cannabis sativa seca, y cinco plantas de cannabis sativa con un peso total de 3 kilos 900 gramos, lo que demuestra que la conducta desplegada por Astorga Astorga recae en los verbos rectores poseer y guardar a cualquier título sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud pública, sin autorización competente, conducta descrita en el artículo 3 relación al artículo 1 de la ley 20.000, en atención a la droga que fue encontrada al interior del inmueble, además de dinero en efectivo, prensas y una pesa digital; considerando además que según documental incorporada consistente en ORD.N° 116/2023 de fecha 26 de enero de 2023, se informó que el Servicio Agrícola y Ganadero no otorgó autorización al encartado para poseer, plantar, cultivar o cosechar especie del género cannabis sativa, en el territorio jurisdiccional de la región metropolitana, según consta en los Registros de la sección de Protección Agrícola S.A.G. RM.”;

9°) Que del razonamiento antes transcrito y de los hechos que se han tenido por comprobados por la judicatura del fondo —reseñados en el fundamento 4° precedente—, se evidencia que no se ha atribuido al acusado un acto concreto de siembra o cosecha, sino la guarda y posesión de una considerable cantidad de cannabis sativa, la que en su mayoría se mantenía seca a granel, otro tanto en



proceso de secado, además de dinero, una pesa y prensa utilizada para comprimir la droga deshidratada (a lo que podemos añadir el arma de fuego de fabricación artesanal, con sus dos cargadores y un silenciador también hallada en el lugar y por la que también resultó condenado), todos elementos que resultan propios del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, desde que son indiciarios de conductas destinadas a poner indebidamente a disposición del consumidor final las sustancias sicotrópicas o estupefacientes incautadas, acciones que exceden por mucho el mero hecho de sembrar, plantar, cultivar y cosechar especies vegetales del género cannabis sin la autorización debida.

Por consiguiente, no configurándose en la especie el error jurídico alegado, también será desestimada la causal de nulidad en examen;

10º) Que, finalmente, en cuanto a la segunda causal de nulidad alegada de manera subsidiaria, prevista en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, reseñada en el fundamento 3º *ut supra*, por infracción al deber de fundamentación y al principio de la lógica de razón suficiente, en cuanto al conocimiento que Astorga Astorga habría tenido sobre la existencia de la droga, resulta útil tener en consideración que la ley exige respecto del examen de fundamentación de las decisiones jurisdiccionales que los tribunales asienten ciertos hechos y expresen los medios que sustentan esas determinaciones fácticas, ya que la motivación de la sentencia legitima la función jurisdiccional y permite conocerla no sólo al acusado sino a todos los intervinientes en el proceso criminal. Este proceso, entonces, supone exponer razones, formular interpretaciones y explicar tomas de posición sobre las tesis que sustentan las partes en el juicio, plasmando en la decisión el convencimiento alcanzado y el razonamiento que respalda la convicción adoptada;

11º) Que revisada la sentencia atacada para los efectos de tutelar la satisfacción de los mandatos descritos precedentemente, resulta forzoso concluir que no son efectivos los defectos que postula el recurso, pues aquella cumple con todas las exigencias antes referidas: el tribunal recurre a la prueba rendida y



expone todas las reflexiones que condujeron a la judicatura inequívocamente al establecimiento del delito de tráfico ilícito de estupefacientes y a la participación en ellos que se atribuye al acusado, motivaciones que se explayan sobre los medios de prueba ofrecidos, incluida las declaraciones de los funcionarios de Carabineros Ortiz Rodríguez, Ripetti Smith, Angulo Fuenzalida, Muñoz Cárdenas, Arias Valdebenito y Gaytán Martínez, todos quienes participaron en la diligencia investigativa de entrada y registro del inmueble en que habitaba el acusado, los que refirieron que la marihuana se encontraba a simple vista por toda la casa, lo que además fue ilustrado a través de fotografías exhibidas en la audiencia de juicio, antecedentes que fueron apreciados por la judicatura en la forma y dentro de los límites señalados en el artículo 297 del Código Procesal Penal, por lo que lo expresado para dar valor a los testimonios y demás pruebas presentadas en la audiencia del juicio no se traduce, en modo alguno, en una contravención al principio de razón suficiente, pues el fallo aporta sus motivos y expresa con claridad cómo y por qué arribó a una determinada conclusión;

12°) Que tal desenlace encuentra su sustento en la lectura de los basamentos noveno y undécimo del fallo, que dan cuenta de la tesis del tribunal sobre la forma de ocurrencia de los hechos, y las razones para tener por acreditada la participación de Astorga Astorga en calidad de autor del ilícito de receptación de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, toda vez que lo expuesto en los aludidos fundamentos abordan tanto los presupuestos objetivos y subjetivos del referido ilícito, como las conclusiones normativas de los sentenciadores y que sustentan el rechazo de la tesis de la defensa, haciéndose cargo de los medios de prueba aportados por ésta y las consideraciones para restarle valor probatorio en los términos que pretende el impugnante.

Cabe tener presente, asimismo, que la impugnación de la sentencia fundada en esta causal no dice relación con las conclusiones a que han arribado los sentenciadores al apreciar la prueba producida en el juicio oral, del momento que en ese aspecto gozan de libertad; con la limitación de que al valorarla no se



aparten de los principios lógicos, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, a fin de fundamentar debidamente el fallo para así controlar su razonabilidad. Sigue de ello que lo que sí es revisable por este medio de impugnación es la estructura racional del juicio o discurso valorativo sobre la prueba desde la perspectiva antes enunciada. En otras palabras, sólo es posible estimar el recurso por esta causal si el tribunal a-quo determina su convicción sobre la base de criterios manifiestamente arbitrarios o aberrantes;

13°) Que, en consecuencia, siendo inefectivo el sustento fáctico de la causal invocada, dado que el tribunal no incurre en las omisiones argumentativas denunciadas, amén que la misma se sustenta en una ponderación diversa a la prueba, proponiendo una distinta a aquella realizada por los jueces del Tribunal Oral, resultan circunstancias que impiden configurar el vicio denunciado, por lo que el mismo será desestimado;

14°) Que, en consideración a las reflexiones anotadas, se concluye que la judicatura del fondo, al dictar la sentencia impugnada, ha cumplido a cabalidad con las normas legales que rigen la materia, sin que se advierta en ello algún vicio de los que invoca el recurrente, por lo que el recurso deducido será íntegramente desestimado;

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, a lo dispuesto en los artículos 359, 373 letras b), 374 letra e) y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por la defensa del acusado **ABRAHAM NICOLÁS ASTORGA ASTORGA**, en contra de la sentencia de siete de febrero de dos mil veinticinco y del juicio oral que le antecedió, en el proceso RUC 2300534869-2, RIT 412-2024 del Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, los que, en consecuencia, **no son nulos**.

Se previene que el Ministro Señor Llanos concurre al rechazo del recurso, en lo tocante al primer capítulo de la causal de nulidad del Art. 373 letra b) del Código Procesal Penal hecha valer por la defensa del acusado por estimar



que, si bien el grado de pureza de la droga (tratándose de sustancias distintas de la cannabis sativa), determinado en conformidad a lo que dispone el Art.43 de la Ley 20.000, es una condición necesaria para establecer si existe o no antijuridicidad material en el hecho a juzgar, ello no constituye un requisito para determinar la existencia del delito del Art.3° de la ley 20.000 en el caso de autos, por cuanto se trata, precisamente, de cannabis sativa.

Asimismo, el previniente deja constancia que ha variado su posición manifestada en el fallo dictado en el recurso de nulidad rol N° 24705-2020, luego de un acabado estudio de nuevos antecedentes, de los cuales aparece que no es posible determinar la pureza, en el caso de la cannabis sativa, conforme a estudios científicos citados en sentencias pronunciadas por el Tribunal Supremo de España. Así, la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2012 señala que *“tratándose de hachís no es exigible la determinación cualitativa de su pureza, más allá de la constancia de la presencia relevante del principio activo THC, pues tanto el hachís, como la grifa o la marihuana no son otra cosa que productos vegetales presentados en su estado natural y en los que las sustancias activas están incorporadas a la propia planta -sin necesidad de proceso químico- de cuya composición forman parte en mayor o menor proporción según la calidad del cultivo, zona agrícola de procedencia y otras variables naturales, sin que quepa variar su composición congénita, en la que la proporción de sustancia activa o tetrahidrocanabinol oscila en función de aquellas variables entre un 2% y un 10%”*.

En el mismo sentido el Tribunal Supremo de España, en su sentencia de 6 de junio del 2000, establece que *“a diferencia de lo que ocurre con la cocaína y la heroína, que son sustancias que se consiguen en estado de pureza por procedimientos químicos, los derivados del cáñamo índico o «cannabis sativa», son productos vegetales que se obtienen de la propia planta sin proceso químico alguno, por lo que la sustancia activa tetrahidrocannabinol en estado puro nunca se contienen en su totalidad en las plantas o derivados. La concentración es*



diversa en cada una de las modalidades de presentación (marihuana, hachís y aceite). Es decir, que toda planta «cannabis sativa» o «cáñamo indico», por propia naturaleza, contiene el tetrahidrocannabinol, que es su principio activo estupefaciente, principio activo que, con mayor o menor riqueza está presente en cualquier parte de la planta (raíz, tallos, hojas) y, naturalmente en sus derivados. Por eso hemos reiterado que no es indispensable la determinación de la concentración de THC en las sustancias derivadas del cáñamo indico o cannabis sativa por ser ordinariamente irrelevante para la subsunción, al tratarse de drogas cuya pureza o concentración del principio activo no depende de mezclas o adulteraciones, como sucede con la heroína o la cocaína, sino de causas naturales como la calidad de la planta.”.

(<https://www.diazvelasco.com/articulos/porcentaje-thc-irrelevancia/>).

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Llanos.

Nº 5.685-2025.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., las Ministras Sras. María Teresa Letelier R. y María Cristina Gajardo H., y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavorari G. No firma el Ministro Sr. Llanos, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por estar con permiso. Santiago, 25 de abril de 2025.





En Santiago, a veinticinco de abril de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

